



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE TUNJA**

**FECHA:** Doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)  
**REFERENCIA:** Proceso ejecutivo laboral de U.I. N° 2022-00124-00  
**EJECUTANTE:** Caja de Compensación Familiar de Boyacá-Comfaboy-  
**EJECUTADO:** Consorcio Infraestructura Educativa

La **Caja de Compensación Familiar de Boyacá –COMFABOY-**, a través de apoderado judicial, solicito que se libre mandamiento de pago en contra de **Consorcio Infraestructura Educativa**, por la suma de siete millones veintiséis mil ochocientos veinte pesos (\$ 7.026.820), por concepto de aportes con destino a la caja de compensación familiar correspondientes a los meses de noviembre, y diciembre de 2020 y de enero a abril de 2021, y por los intereses causados por esa suma de dinero hasta que se materialice su pago, adicionalmente, pretende que se condene al demandado en costas y gastos del proceso ejecutivo. Como soporte de esa reclamación el demandante aportó los siguientes documentos:

1. “*Liquidación de aportes parafiscales*” de 22 de junio de 2021, junto con certificación de entrega de envío de 2 de julio de 2021 expedido por la compañía de correos Servientrega (pág. 13 y 16).
2. Tres (3) documentos signados como “*aviso de incumplimiento*” emitidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá-Comfaboy- dirigido al ejecutado de fecha 13 de abril de 2021, 6 de mayo de 2021 y 03 de junio (págs. 17-20) sin cotejo, ni pruebas de su envío y recibido.
3. Dos documentos signados como “acción persuasiva” – aviso- de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá-Comfaboy-dirigidos al ejecutado de 8 y 21 de julio de 2021 junto con certificaciones de entrega de envío de 14 y 29 de julio de 2021 expedido por la compañía de correos Servientrega, respectivamente (págs. 21-26)

Frente al proceso ejecutivo laboral el CPT en su artículo 100 señala que “*será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*”, con lo que admite una variada gama de títulos ejecutivos, entre los que podemos enunciar las actas de conciliación, los actos administrativos, las sentencias o decisiones judiciales notificadas y ejecutoriadas, entre otros, siempre que tengan origen en una relación de trabajo.

De igual manera el CPT y SS., tampoco regula el trámite del proceso ejecutivo por lo que por remisión normativa derivada de los artículos 100 y 145 del CPT y SS., debe acudirse al dispuesto en la materia por el CGP.

De conformidad con el artículo 430 del CGP, el juez librará mandamiento de pago o ejecutivo, ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que el juez considere legal, cuando a la demanda se acompañe un documento que preste mérito ejecutivo, y frente a las características del título ejecutivo son las previstas en el artículo 422 del CGP que nos precisa que un título ejecutivo es un documento o conjunto de documentos que prueban la existencia de una obligación clara, expresa y exigible en cabeza del deudor y a favor del demandante.

En tal entendido el título ejecutivo debe acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible frente al ejecutado, siendo *clara* la obligación cuando no presenta dificultades en su determinación, de manera que permite identificar sin elementos adicionales al mismo título su objeto, acreedor, deudor, plazo y cuantía es *expresa* en la medida que se encuentra contenida en el documento que impone al obligado una conducta de dar, hacer o no hacer determinada, finalmente, es *exigible* cuando se tiene certeza del tiempo, modo y lugar en que debe cumplirse y su cumplimiento al momento de demandar, no se encuentre sometido a condición o plazo.

De entrada, se advierte que la documental previamente no constituye liquidación que permita establecer porque causa se considera el valor deprecado como el adeudado a cargo del ejecutado, pues no se precisa cuáles serían los trabajadores por los que reclaman aportes, aparentemente adeudados, de manera que no hay claridad frente al origen de la obligación, la forma de su liquidación, impidiendo que la ejecutada ejerza contradicción concreta frente a las reclamaciones de la ejecutada, y constituyendo una tasación arbitraria sin comprobación posible por parte del juzgado.

Asunto cuestionable, cuando en el trámite de dispuesto por la UGPP para efecto de cobro se precisa que resulta necesario un reporte desagregado por aportante de cartera, que debía ser remitido a la UGPP.

Para el caso, se debe precisarse que si bien liquidaciones realizadas por las Cajas de Compensación Familiar para el cobro de los aportes adeudados, constituyen título ejecutivo, debe contar con las características propias de un título de esa naturaleza según las prescripciones de los artículos 100 del CPT y de la SS y 422 del CGP esto es que consignen una obligación clara, expresa y actualmente exigibles, por lo que en el mismo debe poderse establecer con precisión su origen y su monto, pues no se trata de una actuación arbitraria de la entidad que busca el recaudo.

Frente al trámite de cobro, esto es constitución de título y gestiones propias de recaudo, tenemos que se encuentran reguladas en Resolución 2082 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales del Sistema de la Protección Social (UGPP), emitida en el marco de sus funciones en las acciones de cobro de aportes parafiscales consagradas en el artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y 178 de la Ley 1607 de 2012, por lo que para el caso, es necesario acreditar el desarrollo de esas gestiones en procura de configurar el título.

En este aspecto, se encuentra que frente a los avisos de incumplimiento aportados no se acredita su envío y recepción por parte del ejecutado, de manera que, no se puede establecer cumplimiento de los avisos que exige el artículo 9 de la Resolución 2082 de 2016 de la UGPP que regula el trámite de cobro.

Por lo anterior, ante la falta de acreditación de gestiones requeridas para la constitución del título, resulta inviable librar el mandamiento en la forma requerida.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja,

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** - Negar el mandamiento de pago pretendido por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá –COMFABOY- contra Consorcio Infraestructura Educativa., por lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO.** - Reconocer al abogado **Eduardo Alberto Peláez Mesa** identificado con la C.C. No. 9.526.997 de Sogamoso, y portador de la T.P. No. 60.280 del C. S. de la J, como apoderado especial de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá –COMFABOY, en calidad de ejecutante dentro del proceso de la referencia según poder obrante a folio 6 del expediente.

**TERCERO.** - En caso de requerirse por la parte ejecutante devolver la demanda y sus anexos sin necesidad de desglose.

**CUARTO.** - En firme esta decisión, por Secretaría archivar el expediente dejando las constancias de rigor.

**Notifíquese y cúmplase**



**CÉSAR NORBERTO ESCOBAR MENDIVELSO**  
**Juez**

 <b>JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE TUNJA</b>	
<b>Estado</b> <b>16</b>	<b>Fecha</b> <b>13 de mayo de 2022</b>
 <b>SECRETARIO</b>	